



REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

49ª REUNIÓN — 20ª SESIÓN ORDINARIA

30 DE NOVIEMBRE DE 1994

PRIMERA PARTE

Presidencia del señor presidente provisional del Honorable Senado,
doctor EDUARDO MENEM,

del señor vicepresidente del Honorable Senado,
don ORALDO N. BRITOS,

del señor vicepresidente 1º del Honorable Senado,
ingeniero FAUSTINO M. MAZZUCCO

y del señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
doctor CARLOS JUÁREZ

Secretarios: doctor EDGARDO RENÉ PIUZZI y señor EDGARDO P.V. MURGUÍA

Prosecretarios: señor JUAN JOSÉ CANALS y doctor DONALDO ANTONIO DIB

PRESENTES:

AGUIRRE LANARI, Juan R.
ALASINO, Augusto
AVELÍN, Alfredo
BITTEL, Deolindo F.
BORDÓN, José O.
BRANDA, Ricardo A.
BRITOS, Oraldo N.
CABANA, Fernando V.
CAFIERO, Antonio F.
CENDOYA, Jorge J.
COSTANZO, Remo J.
DE LA RÚA, Fernando
FIGUEROA, José O.
GENOUD, José
HUMADA, Julio C.
JUÁREZ, Carlos A.
LEÓN, Luis A.
LOSADA, Mario A.
LUDUEÑA, Felipe E.
MAC KARTHY, César
MARTÍNEZ, Daniel E.
MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique M.
MASSAT, Jorge
MAZZUCCO, Faustino M.
MENEM, Eduardo

MIRANDA, Julio
MOLINA, Pedro E.
OYARZÚN, Juan Carlos
PEÑA de LÓPEZ, Ana M.
RIVAS, Olijela del Valle
RODRÍGUEZ SAÁ, Alberto J.
ROMERO, Juan Carlos
ROMERO FERIS, José A.
RUBEO, Luis
SÁNCHEZ, Libardo N.
SAN MILLÁN, Julio A.
SAPAG, Felipe R.
SNOPEK, Guillermo E.
SOLANA, Jorge D.
SOLARI YRIGOYEN, Hipólito
STORANI, Conrado H.
VACA, Eduardo P.
VERNA, Carlos Alberto
VILLARROEL, Pedro G.

AUSENTES. CON AVISO:

BRAVO, Leopoldo
FADEL, Mario N.
LAFFERRIÈRE, Ricardo E.

POR ENFERMEDAD:

OTERO, Edison

SUMARIO

1. Por invitación del señor presidente provisional del Honorable Senado, el señor senador por Mendoza licenciado José Octavio Bordón procede al izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto. (Pág. 4585.)
2. Homenaje al Día del Médico. (Pág. 4585.)
3. Asuntos entrados:
 - I. Comunicaciones de la Presidencia. (Pág. 4588.)
 - II. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar a la doctora Susana María de la Peña como jueza nacional de primera instancia del Trabajo de la Capital Federal (P.E.-461/94). (Pág. 4588.)
 - III. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar al doctor Carlos J. Branca como juez nacional en lo criminal y correccional federal de la Capital Federal (P.E.-517/94). (Pág. 4588.)
 - IV. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar a la doctora Hilda Kogan como jueza nacional de primera instancia del Trabajo de la Capital Federal (P.E.-518/94). (Pág. 4589.)
 - V. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar a la doctora Graciela M. Gianella como jueza nacional de primera instancia del Trabajo de la Capital Federal (P.E.-519/94). (Pág. 4589.)
 - VI. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la promoción al grado inmediato superior del personal militar superior de la Fuerza Aérea, brigadieres Alberto Vianna y Horacio E. Genolet (P.E.-529/94). (Pág. 4589.)
 - VII. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la promoción al grado inmediato superior del teniente coronel Alejandro Rodríguez (P.E.-530/94). (Pág. 4589.)
 - VIII. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la promoción al grado superior de oficiales superiores de la Armada (P.E.-531/94). (Página 4589.)
 - IX. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la promoción al grado inmediato superior de oficiales jefes de la Armada (P.E.-532/94). (Página 4590.)
 - X. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la promoción al grado inmediato superior de oficiales superiores de la Armada (P.E.-533/94). (Pág. 4590.)
 - XI. Mensaje y decreto del Poder Ejecutivo por el que se prorrogan las sesiones ordinarias del Honorable Congreso de la Nación (P.E.-516/94). (Pág. 4590.)
 - XII. Comunicaciones de la Presidencia de la Nación. (Pág. 4591.)
 - XIII. Modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley que le fuera pasado en revisión por el que se deroga el inciso 1° del artículo 73 y los artículos 74 y 118 del Código Penal en lo que respecta al adulterio (S.-502/93). (Pág. 4592.)
 - XIV. Proyecto de ley en revisión por el que se establece un régimen de identificación del recién nacido y su madre (C.D.-90/94). (Pág. 4593.)
 - XV. Proyecto de ley en revisión por el que se exceptúa a las cooperativas agropecuarias del pago de la contribución especial establecida en el artículo 6° de la ley 23.427 (C.D.-91/94). (Pág. 4594.)
 - XVI. Proyecto de ley en revisión sobre contrato de explotación tambera (C.D.-92/94). (Pág. 4594.)
 - XVII. Proyecto de ley en revisión por el que se crea una Comisión Investigadora del Parque Tres de Febrero (C.D.-93/94). (Pág. 4595.)
 - XVIII. Proyecto de ley en revisión por el que se crean normas para prevenir los riesgos que se derivan del uso del tabaco (C.D.-94/94). (Pág. 4596.)
 - XIX. Proyecto de ley en revisión por el que se dispone que la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires no podrá celebrar actos y contratos que importen la disposición de bienes de su propiedad hasta la asunción de las nuevas autoridades comunales (C.D.-95/94). (Página 4596.)
 - XX. Proyecto de ley en revisión por el que se establece el Plan Nacional para Emergencia Habitacional (C.D.-98/94). (Pág. 4597.)
 - XXI. Proyecto de ley en revisión por el que se ordena la publicación del texto oficial de la Constitución Nacional (C.D.-99/94). (Pág. 4599.)
 - XXII. Proyecto de ley en revisión por el que se establece el sistema federal de la vivienda (C.D.-100/94). (Pág. 4614.)

103. Consideración del dictamen de las comisiones de Obras Públicas y de Transportes en el proyecto de comunicación del señor senador Snopek por el que se solicita se licite y adjudique la obra correspondiente a la construcción de un puente sobre el río Grande, en la ruta nacional 34, en Jujuy (S.-973/94). Se aprueba. (Pág. 4884.)
104. Consideración del dictamen de las comisiones de Obras Públicas y de Transportes en el proyecto de comunicación del señor senador Snopek por el que se solicita se licite y adjudique la obra referida al mejoramiento y pavimentación de la ruta nacional 9 entre El Carmen y San Salvador de Jujuy, en Jujuy (S.-974/94). Se aprueba. (Pág. 4885.)
105. Consideración del dictamen de las comisiones de Economías Regionales, de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura y Ganadería en el proyecto de comunicación del señor senador San Millán por el que se solicita se declare en emergencia agropecuaria a varios departamentos de Salta afectados por fenómenos meteorológicos (S.-517/94). Se aprueba. (Pág. 4886.)
106. Consideración del dictamen de las comisiones de Población y Desarrollo y de Cultura en el proyecto de resolución del señor senador Losada por el que se declaran de interés cultural y educativo las II Jornadas de Lingüística Aborigen organizadas por el Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires (S.-1.232/94). Se aprueba con modificaciones. (Pág. 4887.)
107. Consideración del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de comunicación del señor senador Romero Feris por el que se solicitan informes acerca de la implementación de controles para evitar el trabajo de menores (S.-1.273/93). Se aprueba. (Pág. 4887.)
108. Consideración del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de comunicación del señor senador Losada por el que se solicitan informes acerca de las condiciones laborales del personal de la empresa Buenos Aires Greens contratada por el Ente Binacional Yacaré (S.-1.565/93). Se aprueba. (Pág. 4888.)
109. Consideración del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de comunicación del señor senador Solari Yrigoyen por el que se solicita se extienda a las cooperativas prestadoras de servicios públicos esenciales del interior del país los beneficios del decreto 2.609/93 (S.-2.172/93). Se aprueba. (Pág. 4889.)
110. Consideración de los dictámenes, en mayoría y minoría, de las comisiones de Pesca, de Ecología y Desarrollo Humano y de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración del señor senador Ludueña por el que se adhiere a la declaración del Poder Ejecutivo nacional de prohibir la pesca del calamar al sur del paralelo 43° (S.-271/94). Se aprueba el dictamen de mayoría. (Página 4890.)
111. Consideración del dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Ecología y Desarrollo Humano en el proyecto de comunicación del señor senador Ludueña por el que se solicitan informes acerca de la aplicación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (S.-811/94). Se aprueba. (Pág. 4892.)
112. Consideración del dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Ecología y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración del señor senador Cafiero por el que se declara de interés para el Honorable Senado el Capítulo Argentino de la Cruz Verde Internacional (S.-385/94). Se aprueba. (Pág. 4893.)
113. Consideración del dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Derechos y Garantías en el proyecto de declaración del señor senador Solari Yrigoyen por el que se expresa beneplácito por la resolución de la OEA que define como "crimen de lesa humanidad la desaparición forzada de personas" (S.-366/94). Se aprueba. (Pág. 4894.)
114. A moción del señor senador Cafiero se resuelve postergar por una semana la consideración del dictamen de las comisiones de Ecología y Desarrollo Humano y de Minería en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre protección ambiental para la minería (P.E.-307/94). (Página 4895.)
115. Consideración del dictamen de las comisiones de Economía, de Economías Regionales y de Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el proyecto de comunicación del señor senador Costanzo por el que se solicitan informes sobre la utilización de líneas de crédito vigentes (S.-140/94). Se aprueba. (Pág. 4902.)
116. Consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Ecología y Desarrollo Humano en el proyecto de resolución del señor senador de la Rúa por el que se solicitan informes acerca de la concesión de espacios verdes en Ezeiza (S.-1.001/94). Se aprueba. (Pág. 4902.)
117. Consideración del dictamen de la Comisión de Ecología y Desarrollo Humano en el proyecto de comunicación del señor senador Solana por el que se solicitan informes sobre diversos aspectos referidos a la Reserva Ecológica Costanera Sur (S.-1.107/94). Se aprueba. (Pág. 4904.)
118. Moción de reconsideración formulada por el señor senador Snopek respecto del dictamen a que hace referencia el punto 116 de este sumario, a efectos de solicitar su vuelta a comisión. Se aprueba. (Pág. 4905.)
119. Consideración del dictamen de las comisiones de Población y Desarrollo y de Ecología y Desarrollo Humano en el proyecto de ley del señor senador

Señalar su convicción de que la erradicación de tan abominable práctica contribuye a la plena vigencia de los derechos fundamentales del hombre en Latinoamérica, presupuesto indeclinable para la construcción de la vida en democracia.

Hipólito Solari Yrigoyen.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El 8 de junio de 1994, en la ciudad de Belem, Brasil, la Organización de los Estados Americanos (OEA) adoptó un instrumento trascendente para el desarrollo progresivo de los derechos humanos en Latinoamérica.

Se trata de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas.

Al definir, por primera vez, la desaparición de personas como un "crimen de lesa humanidad" sin atenuantes, el principal organismo interamericano se hace cargo de uno de los más dramáticos estigmas que ha sufrido el continente en las últimas dos décadas con ensañada virulencia y establece instrumentos jurídicos para prevenirlo, sancionarlo y erradicarlo.

Mediante el tratado multinacional los países americanos se comprometen a repudiar, combatir y crear mecanismos para desterrar la desaparición forzada de personas, la cual "constituye una afrenta a la conciencia del hemisferio y una grave ofensa de naturaleza odiosa a la dignidad intrínseca de la persona humana".

Las cifras conocidas de víctimas de esta forma de violencia represiva superan los setenta mil detenidos-desaparecidos en las últimas décadas y según informes de las Naciones Unidas, hubo más de ochocientos casos de desapariciones en los pasados cuatro años.

Si bien el problema de la desaparición forzada de personas existía en otras regiones del mundo, como práctica institucional sistematizada fue creada en la Argentina.

Ha sido precisamente la repercusión internacional del caso argentino la que ha dado lugar a numerosas resoluciones de la comunidad internacional en procura de prevenir y sancionar la práctica de desaparición forzada de personas como un procedimiento cruel e inhumano y un despreciable instrumento para la represión y supresión física de disidentes políticos.

La experiencia demuestra que la desaparición forzada de personas no sólo constituye una privación arbitraria de la libertad, sino también un gravísimo peligro para la integridad personal, la seguridad y la vida misma de la víctima.

Es por otra parte, como lo ha reconocido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una verdadera forma de tortura para sus familiares y amigos, por la incertidumbre en que se encuentran sobre su suerte y por la imposibilidad en que se hallan de darle asistencia legal, moral y material.

Es además una manifestación de la incapacidad del gobierno para mantener el orden público y la seguridad del Estado por los medios autorizados por las leyes, como de su evidente rebeldía frente a los órganos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos.

En concepto de dicha comisión, la desaparición forzada de personas constituye, en definitiva, un método empleado para evitar la aplicación de las disposiciones legales establecidas en defensa de la libertad individual, de la integridad física, de la dignidad, de la vida y de los más relevantes derechos de la persona humana.

La convención, que deberá entrar en vigor dentro de un mes, obliga a los Estados firmantes a no practicar, no permitir ni tolerar la desaparición forzada de personas "ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales".

La protección internacional creada ahora contra este crimen aberrante, nos impulsa a continuar bregando por su regulación legal en nuestro derecho interno.

En el año 1987 presenté por primera vez un proyecto de ley (expediente S.-353/87), proponiendo la incorporación al Código Penal del delito de desaparición forzada de personas.

Dicha iniciativa ha sido representada por última vez ante el Honorable Senado de la Nación el 4 de mayo de 1992 (expediente S.-13/92). En la actualidad, aún se encuentra a consideración de las comisiones senatoriales de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios y de Derechos y Garantías a las que fue remitida.

Celebramos el compromiso asumido por todos los Estados miembros de la OEA, tendiente a erradicar definitivamente la práctica de la desaparición forzada de personas, reconociendo a su vez el vínculo indisoluble entre democracia y derechos humanos.

Hipólito Solari Yrigoyen.

Sr. Presidente (Britos). — En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

— En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Britos). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.

114

PROTECCION AMBIENTAL PARA LA ACTIVIDAD MINERA. POSTERGACION

Sr. Presidente (Britos). — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Ecología y Desarrollo Humano y de Minería en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre protección ambiental para la actividad minera. (Orden del Día N° 912.)

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Piuze). — (Lee)

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Ecología y Desarrollo Humano y de Minería han considerado el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional (expediente S.-307/

94) sobre protección ambiental para la actividad minera; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja aprobarlo con las siguientes modificaciones:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados etc.

Artículo 1º — Sustitúyese el artículo 282 del Código de Minería por el siguiente:

Artículo 282: Los mineros pueden explotar sus pertenencias libremente, sin sujeción a otras reglas que las de su seguridad, policía y conservación del ambiente.

La autoridad de aplicación ejercerá una constante vigilancia a estos fines.

La protección del ambiente y la conservación del patrimonio natural en el ámbito de la actividad minera quedarán sujetas a las disposiciones establecidas en el título complementario.

Art. 2º — Incorpórase como título complementario prestando al título final del Código de Minería el siguiente:

TÍTULO COMPLEMENTARIO

De la protección ambiental para la actividad minera

Sección primera

Ámbito de aplicación. Alcances

Artículo 1º: La protección del ambiente y la conservación del patrimonio natural, que pueda ser afectado por la actividad minera, se regirán por las disposiciones de este título.

Artículo 2º: Están comprendidas dentro del régimen de este título, todas las personas físicas y jurídicas, operadores privados y públicos, los entes centralizados o descentralizados y las empresas del Estado nacional, provincial y municipal que desarrollen actividades comprendidas en el artículo IV de este título.

Artículo 3º: Las personas comprendidas en las actividades indicadas en el artículo 4º serán responsables de todo daño ambiental que se produzca por el incumplimiento de lo establecido en el presente título, ya sea que lo ocasionen en forma directa o por las personas que se encuentren bajo su dependencia o por parte de contratistas o subcontratistas, o que lo cause el riesgo o vicio de la cosa.

El titular del derecho minero será solidariamente responsable, en los mismos casos, del daño que ocasionen las personas por él habilitadas para el ejercicio de tal derecho.

Artículo 4º: Las actividades comprendidas en el presente título son:

- a) Prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación y extracción de sustancias minerales comprendidas en el Código de Minería;
- b) Los procesos de trituración, molienda, beneficio, pelletización, sinterización, briquetado, ela-

boración primaria, calcinación, fundición, refinación, aserrado, tallado, pulido y lustrado.

Artículo 5º: Para aquellas áreas naturales protegidas y consideradas de uso múltiple por normas de carácter nacional, provincial o municipal, la autoridad de aplicación evaluará la actividad minera establecida o a establecerse en concordancia con los demás organismos de competencia.

Artículo 6º: Serán autoridad de aplicación para lo dispuesto por el presente título las autoridades que las provincias determinen en el ámbito de su jurisdicción.

Sección segunda

De los instrumentos de gestión ambiental

Artículo 7º: Los responsables comprendidos en el artículo 3º de este título deberán presentar ante la autoridad de aplicación, y antes del inicio de cualquier actividad especificada en el artículo 4º del presente título, un informe de impacto ambiental.

La autoridad de aplicación podrá prestar asesoramiento a los pequeños productores para la elaboración del mismo.

Artículo 8º: La autoridad de aplicación evaluará el informe de impacto ambiental y se pronunciará por la aprobación mediante una declaración de impacto ambiental para cada una de las etapas del proyecto o de implementación efectiva, con excepción de las etapas de prospección y exploración.

Artículo 9º: El informe de impacto ambiental para la etapa de prospección deberá contener el tipo de acciones a desarrollar y el eventual riesgo de impacto ambiental que las mismas pudieran acarrear.

Para la etapa de exploración, el citado informe deberá contener una descripción de los métodos a emplear y las medidas de protección ambiental que resultaren necesarias.

En las etapas mencionadas precedentemente no será necesaria la previa aprobación del informe por parte de la autoridad de aplicación para el inicio de las actividades, sin perjuicio de las responsabilidades previstas en el artículo 3º del presente título por los daños que se pudieran ocasionar.

Artículo 10: La autoridad de aplicación se expedirá en un plazo no mayor de sesenta (60) días hábiles desde que el interesado lo presente. Vencido el término, sin pronunciamiento expreso, el informe de impacto ambiental se considerará aprobado.

Artículo 11: Si mediante decisión fundada se estimare insuficiente el contenido del informe de impacto ambiental, el responsable podrá efectuar una nueva presentación dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles de notificado.

Si la autoridad de aplicación en el término de treinta (30) días hábiles no se expediera al efecto, el informe se considerará aprobado.

Artículo 12: La declaración de impacto ambiental será actualizada como máximo en forma bianual,

debiéndose presentar un informe conteniendo los resultados de las acciones de protección ambiental ejecutadas, así como de los hechos nuevos que se hubieren producido.

Artículo 13: En el caso de producirse desajustes entre los resultados esperados según la declaración de impacto ambiental, y los logrados, deberá acordarse la introducción de modificaciones, atendiendo la existencia de nuevos conocimientos acerca del comportamiento de los ecosistemas afectados y a la introducción de acciones de mayor eficiencia para la protección del área de influencia de la actividad. Estas medidas podrán ser consideradas a requerimiento de la autoridad de aplicación o a solicitud del operador minero.

Artículo 14: Los equipos, instalaciones, sistemas, acciones y actividades de prevención, mitigación, rehabilitación, restauración o recomposición ambiental, consignadas por el responsable e incluidas en la declaración de impacto ambiental constituirán obligación del responsable y serán susceptibles de fiscalización de cumplimiento por parte de la autoridad de aplicación.

Artículo 15: No será aceptada la presentación cuando el titular o cualquier tipo de mandatario o profesional de la empresa estuviera inhabilitado o cumpliendo sanciones por violación al presente título.

Sección tercera

De las normas de protección y conservación ambientales

Artículo 16: Las normas que reglamenten este título establecerán:

- a) Los procedimientos, métodos y estándares requeridos, conducentes a la protección ambiental, según las etapas de actividad comprendidas en el artículo 4º de este título, categorización de las actividades por grado de riesgo ambiental y caracterización ecosistémica del área de influencia;
- b) La creación de un registro de consultores y laboratorios a los que los interesados podrán solicitar asistencia para la realización de trabajos de monitoreo y auditoría externa;
- c) La creación de un registro de infracciones e infractores.

Artículo 17: El informe de impacto ambiental debe incluir, con excepción de las etapas de prospección y exploración.

- a) La ubicación y descripción ambiental del área de influencia;
- b) La descripción del proyecto minero;
- c) Las eventuales modificaciones sobre suelo, agua, atmósfera, flora y fauna, relieve y ámbito sociocultural;
- d) Las medidas de prevención, mitigación, rehabilitación, restauración o recomposición del medio alterado, según correspondiere;
- e) Metodología utilizada.

Sección cuarta

De las actividades mineras de los productores, transportistas y almacenadores mineros

Artículo 18: Toda persona física o jurídica que realice las actividades comprendidas en este título y que cumpla con los requisitos exigidos por la misma, podrá solicitar ante la autoridad de aplicación un certificado de calidad ambiental por el plazo que establezca la reglamentación y que utilizará para la comercialización de los productos.

Artículo 19: Las disposiciones reglamentarias establecerán las normas operativas para productores, transportistas o almacenadores mineros con el fin de la protección ambiental.

Sección quinta

De las responsabilidades ante el daño ambiental

Artículo 20: Sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales que establezcan las normas vigentes, todo el que causare daño actual o residual al patrimonio ambiental, estará obligado a mitigarlo, rehabilitarlo, restaurarlo o recomponerlo según correspondiere.

Sección sexta

De las infracciones y sanciones

Artículo 21.: El incumplimiento de las disposiciones establecidas en este título, cuando no estén comprendidas dentro del ámbito de las responsabilidades penales, serán sancionadas con:

- a) Apercibimiento;
- b) Amonestación pública;
- c) Multas, las que serán establecidas por la autoridad de aplicación conforme las pautas dispuestas en el artículo 292 del Código de Minería;
- d) Suspensión del goce del certificado de calidad ambiental de los productos;
- e) Reparación de los daños ambientales;
- f) Clausura temporal, la que será progresiva en los casos de reincidencia. En caso de tres (3) infracciones graves se procederá al cierre definitivo del establecimiento.

Artículo 22: Las sanciones establecidas en el artículo 21 se aplicarán previo sumario que asegure el debido proceso legal y se graduarán de acuerdo con la naturaleza de la infracción y el daño producido.

Artículo 23: El que cometiere una infracción habiendo sido sancionado anteriormente por otra infracción a este título, será tenido por reincidente a los efectos de la graduación de la pena.

Artículo 24: Cuando una empresa que constituya una persona jurídica causare un daño ambiental, los directores, gerentes, administradores, representantes, profesionales y otros mandatarios de la misma que hubieren intervenido en el hecho

punible, responderán solidariamente con aquella en las sanciones de carácter pecuniario.

Sección séptima

De la educación y defensa ambiental

Artículo 25: La autoridad de aplicación implementará un programa de formación e ilustración con la finalidad de orientar a la población, en particular a aquella vinculada a la actividad minera, sobre la comprensión de los problemas ambientales, sus consecuencias y prevención con arreglo a las particularidades regionales, étnicas, sociales, económicas y tecnológicas del lugar en que se desarrollen las tareas.

Artículo 26: Toda persona o asociación de defensa ambiental reconocida por las autoridades tiene el derecho a denunciar o a informarse ante la autoridad de aplicación sobre las infracciones a lo dispuesto en el presente título.

Sección octava

Disposiciones transitorias y generales

Artículo 27: Para aquellas actividades comprendidas en el artículo 4º de este título, y cuya iniciación sea anterior a la vigencia de la presente ley, el concesionario o titular de la planta e instalaciones deberá presentar, dentro del año de su entrada en vigor, el informe de impacto ambiental.

Artículo 28: De conformidad con lo prescripto por el artículo 27 de este título:

- a) Los impactos irreversibles e inevitables producidos no podrán afectar bajo ningún aspecto las actividades que se estuvieren realizando;
- b) Las acciones conducentes a la corrección de impactos futuros, consecuencia de la continuidad de las actividades, serán consideradas por el responsable en conjunto con la autoridad de aplicación, quedando a cargo del primero la ejecución de las mismas.

Artículo 29: La presente ley es de orden público y entrará en vigencia a los noventa (90) días de su publicación, plazo dentro del cual el Poder Ejecutivo nacional la reglamentará.

Art. 3º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De acuerdo con los términos del artículo 119 del reglamento, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 13 de octubre de 1994.

Antonio F. Cañero. — Leopoldo Bravo. — Faustino M. Mazzucco. — Libardo N. Sánchez. — Guillermo E. Snopek. — Jorge J. Cendoya. — Pedro E. Molina. — Enrique Martínez Almudevar. — Fernando V. Cabana. — Alfredo Avelín.

ANTECEDENTE

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

PROTECCION AMBIENTAL PARA LA MINERIA

Artículo 1º — Sustitúyese el artículo 282 del Código de Minería por el siguiente:

Artículo 282: Los mineros pueden explotar sus pertenencias libremente, sin sujeción a otras reglas que las de su seguridad, policía y conservación del ambiente.

La autoridad de aplicación ejercerá una constante vigilancia a estos fines.

La protección del ambiente y la conservación del patrimonio natural en el ámbito de la actividad minera quedarán sujetas a las disposiciones establecidas en el título complementario.

Art. 2º — Incorpórase como título complementario precediendo al título final del Código de Minería el siguiente:

TITULO COMPLEMENTARIO

De la protección ambiental para la minería

Sección primera

Ámbito de aplicación. Alcances

Artículo 1º: La protección del ambiente y la conservación del patrimonio natural, que pueda ser afectado por la actividad minera, se regirán por las disposiciones de este título.

Artículo 2º: Están comprendidas dentro del régimen de este título, todas las personas físicas y jurídicas, operadores privados y públicos, los entes centralizados o descentralizados y las empresas del Estado nacional, provincial y municipal que desarrollen actividades comprendidas en el artículo 4º de este título.

Artículo 3º: El titular del derecho minero y las personas comprendidas en las actividades indicadas en el artículo 4º serán responsables solidarios de los daños que se produzcan por el incumplimiento de lo establecido en el presente título, quedando eximidos de la responsabilidad que prescribe el artículo 58 del Código de Minería en los casos en que hubiera mediado conducta dolosa por parte del responsable del daño o el hecho hubiera sido cometido por un intruso, o cuando el daño fuera consecuencia de una catástrofe natural.

Artículo 4º: Las actividades comprendidas en el presente título son:

- a) Prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación y extracción de sustancias minerales comprendidas en el Código de Minería;

- b) Los procesos de trituración, molienda, beneficio, pelletización, sinterización, briqueteo, elaboración primaria, calcinación, fundición, refinación, aserrado, tallado, pulido y lustrado.

Artículo 5º: Para aquellas áreas naturales protegidas y consideradas de uso múltiple por las leyes de carácter nacional y provincial o normas municipales, la autoridad de aplicación evaluará la actividad minera establecida o a establecerse en concordancia con los demás organismos de competencia.

Artículo 6º: Serán autoridad de aplicación para lo dispuesto por el presente título las autoridades que las provincias determinen en el ámbito de su jurisdicción.

Sección segunda

De los instrumentos de gestión ambiental

Artículo 7º: Los responsables comprendidos en el artículo 3º de este título deberán presentar ante la autoridad de aplicación, y antes del inicio de cualquier actividad especificada en el artículo 4º del presente título, un informe de impacto ambiental.

Artículo 8º: La autoridad de aplicación evaluará el informe de impacto ambiental, y se pronunciará mediante una declaración de impacto ambiental para cada una de las etapas del proyecto o de implementación efectiva presentadas. A tal efecto dicha autoridad deberá:

- a) Exigir contenidos de mínima en las evaluaciones de impacto ambiental establecidas en las reglamentaciones;
- b) Proveer la información al Sistema Nacional de Información Ambiental a cargo de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano dependiente de la Presidencia de la Nación.

Artículo 9º: La autoridad de aplicación se expedirá en un plazo no mayor de sesenta (60) días hábiles desde que el interesado lo presente.

Artículo 10: Si mediante decisión fundada se estimare insuficiente el contenido del informe de impacto ambiental, el responsable podrá efectuar una nueva presentación dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles de notificado, a fin de completar las exigencias requeridas hasta que el mismo sea efectivamente aprobado.

Artículo 11: La declaración de impacto ambiental será actualizada en forma bianual, debiéndose presentar un informe conteniendo los resultados de las acciones de protección ambiental ejecutadas, así como de los hechos nuevos que se hubieren producido.

Artículo 12: En el caso de producirse desajustes entre los resultados esperados según la declaración de impacto ambiental, y los logrados, podrá acor-

darse la introducción de modificaciones, atendiendo la existencia de nuevos conocimientos acerca del comportamiento de los ecosistemas afectados y a la introducción de acciones de mayor eficiencia para la protección del área de influencia de la actividad. Estas medidas podrán ser consideradas a requerimiento de la autoridad de aplicación o a solicitud del operador minero.

Artículo 13: La autoridad de aplicación pondrá a disposición de los interesados que lo soliciten, un registro de consultores para la elaboración del informe de impacto ambiental y en el caso de los pequeños productores podrá prestar asesoramiento en la elaboración del mismo.

Artículo 14: Los equipos, instalaciones, sistemas, acciones y actividades de prevención y restauración ambiental, consignadas por el responsable e incluidas en la declaración de impacto ambiental constituirán obligación del responsable y serán susceptibles de fiscalización de cumplimiento por parte de la autoridad de aplicación.

Artículo 15: No será aceptada la presentación cuando el titular, cualquier tipo de mandatario o profesional de empresa, estuviera inhabilitado o cumpliendo sanciones por violación al presente título.

Sección tercera

De las normas de protección y conservación ambientales

Artículo 16: Las normas que reglamenten este título establecerán los procedimientos, métodos y estándares requeridos, conducentes a la protección ambiental, según las etapas de actividad comprendidas en el artículo 4º de este título y la caracterización ecosistemática del área de influencia del proyecto.

Artículo 17: El informe de impacto ambiental debe incluir en todos los casos:

- a) La ubicación y descripción ambiental;
- b) La descripción del proyecto minero;
- c) Las eventuales modificaciones sobre suelo, agua, aire, flora y fauna, relieve y ámbito sociocultural;
- d) Las medidas de mitigación, rehabilitación o restauración del medio alterado, según correspondiere.

Sección cuarta

De las actividades mineras de los productores, transportistas y almacenadores mineros

Artículo 18: Toda persona física o jurídica que realice las actividades comprendidas en este título y que cumpla con los requisitos exigidos por la misma, recibirá de la autoridad de aplicación un certificado ambiental por el plazo que establezca la reglamentación y que podrá utilizar para su comercialización.

Artículo 19: Las disposiciones reglamentarias establecerán las normas operativas para productores, transportistas o almacenadores mineros con el fin de la protección ambiental.

Sección quinta

De las responsabilidades ante el daño ambiental

Artículo 20: Sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales que establezcan las normas vigentes, todo el que causare daño actual o residual al patrimonio ambiental, estará obligado a mitigarlo, rehabilitarlo o restaurarlo, según correspondiere.

Sección sexta

De las infracciones y sanciones

Artículo 21: El incumplimiento de las disposiciones establecidas en este título, cuando no estén comprendidas dentro del ámbito del Código Penal serán sancionadas con:

- a) Amonestación pública;
- b) Multas establecidas por la autoridad de aplicación según los artículos 291 y 292 del Código de Minería;
- c) Suspensión del goce del certificado ambiental;
- d) Reparación de los daños ambientales;
- e) Clausura temporal, la que será progresiva en los casos de reincidencia. En caso de tres (3) infracciones graves se procederá al cierre definitivo del establecimiento.

Artículo 22: Las sanciones establecidas en el artículo 21 se aplicarán previo sumario que asegure el debido proceso legal y se graduarán de acuerdo con la naturaleza de la infracción y el daño producido.

Artículo 23: El que cometiere una infracción habiendo sido sancionado anteriormente por otra infracción a este título, será tenido por reincidente a los efectos de la graduación de la pena.

Artículo 24: Cuando una empresa que constituya una persona jurídica causare un daño ambiental, los directores, gerentes, administradores, representantes, profesionales y otros mandatarios de la misma que hubieren intervenido en el hecho punible, responderán solidariamente con aquélla en las sanciones de carácter pecuniario, excepto en los casos enumerados en la última parte del artículo 3º de este título.

Sección séptima

De la educación y defensa ambiental

Artículo 25: La autoridad de aplicación implementará un programa de formación e ilustración con la finalidad de orientar a la población, en particular a aquella vinculada a la actividad minera, sobre la comprensión de los problemas ambientales,

sus consecuencias y prevención con arreglo a las particularidades regionales, étnicas, sociales, económicas y tecnológicas del lugar en que se desarrollen las tareas.

Artículo 26: Toda persona física o jurídica u organización de defensa ambiental reconocida por las autoridades tiene el derecho a denunciar o a informarse ante la autoridad de aplicación sobre las infracciones a lo dispuesto en el presente título.

Sección octava

Disposiciones transitorias y generales

Artículo 27: Para aquellas actividades comprendidas en el artículo 4º de este título, y cuya iniciación sea anterior a la vigencia de la presente ley, el concesionario o titular de la planta e instalaciones deberá presentar, dentro del año de su entrada en vigor, el informe de impacto ambiental.

Artículo 28: De conformidad con lo prescripto por el artículo 27 de este título:

- a) Los impactos irreversibles e inevitables producidos no podrán afectar bajo ningún aspecto las actividades que se estuvieren realizando;
- b) Las acciones conducentes a la corrección de impactos futuros, consecuencia de la continuidad de las actividades, serán consideradas por el responsable en conjunto con la autoridad de aplicación, quedando a cargo del primero la ejecución de las mismas.

Artículo 29: La presente ley es de orden público y entrará en vigencia a los noventa (90) días de su publicación, plazo dentro del cual el Poder Ejecutivo nacional la reglamentará.

Art. 3º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

CARLOS S. MENEM.

Domingo F. Cavallo. — Rodolfo C. Barra.

Mensaje del Poder Ejecutivo

Buenos Aires, 21 de septiembre de 1994.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a efectos de remitir a consideración el proyecto de ley adjunto de Protección Ambiental para la Minería.

El Código de Minería en sus artículos 109 y 282 y la ley 24.196 de Inversiones Mineras determinan la aplicación de normas para la conservación ambiental, atribuyendo a la Secretaría de Minería del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos juntamente con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano dependiente de la Presidencia de la Nación, la responsabilidad del mecanismo que se constituya para el logro de este objetivo.

En ejercicio de esta atribución, la Secretaría de Minería del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos elaboró el proyecto de ley adjunto que procura

la protección del ambiente y la conservación del patrimonio natural que pueda ser afectado por la actividad minera.

El Código de Minería y las leyes recientemente sancionadas establecen claramente el rol fundamental que en el manejo de la actividad minera tienen las provincias y esto, debe ser naturalmente extendido a la problemática ambiental para la efectiva aplicación del presente instrumento.

De la apretada síntesis que se deja expuesta, se concluye que existe desde lejos una visión realista de la problemática ambiental producto de la actividad minera considerada de alto riesgo, y la reciente y expresa necesidad de articular mecanismos que permitan fiscalizar la producción, tratamiento, industrialización, transporte, almacenamiento y comercialización de minerales.

Se comprende entonces que una legislación destinada a regular actividades económicas fuertemente influenciadas por la ciencia y la tecnología, deben actualizarse frente a las exigencias que hacen a la conservación ambiental proveyendo nuevas alternativas jurídicas que armonicen las relaciones del Estado con las empresas interesadas en la exploración y explotación de los recursos y los grandes destinatarios que son los habitantes del planeta.

La extrema importancia que está adquiriendo en el mundo la preservación del hábitat natural del hombre, exige la necesidad de aplicar una legislación positiva.

Precisamente, el presente trabajo resume la participación de diversos especialistas en el tema que han incorporado modernos conceptos para dar un adecuado lugar a la protección ambiental.

Asimismo, la legislación y el proyecto lo prevé, necesita reforzar la acción mancomunada de las fuerzas productivas juntamente con el proceder del Estado con el fin de lograr un desarrollo sustentable de los recursos naturales involucrados.

La legislación debe tener en cuenta las particulares condiciones ecosistémicas de la República Argentina dado el alto grado de biodiversidad de su territorio. Este hecho y el de no afectación de grandes poblaciones en las inmediaciones de los emprendimientos mineros hacen que se prevea la necesidad de aplicación de estándares de control concordantes con los internacionales en uso.

Debe también considerarse que la minería contribuye a un mejor ordenamiento territorial desde que posibilita el asentamiento de infraestructura básica en los lugares más aislados de nuestro territorio por encontrarse los yacimientos en las regiones más remotas.

Las acciones de fomento son fundamentales en el logro de estos objetivos por lo cual deberán impulsarse en lo que haga a la rehabilitación y restauración de los componentes naturales comprendidos ya sea suelo, agua, aire, flora, fauna, relieve y ámbito sociocultural.

Se ha tornado imperiosa la necesidad de incorporar los principios de protección ambiental dentro de nuestro Código de Minería —"título complementario"— mediante la inclusión de normas jurídicas modernas acordes con los principios generales contenidos en el Código de Minería y ajustados al avance científico y tecnológico.

La normativa jurídica recientemente sancionada, para posibilitar el pleno desenvolvimiento y desarrollo de la actividad minera, debe ser complementada como base

de una nueva estructura de la minería moderna, adecuando nuestra legislación a las características que la sociedad reclama, a fin de lograr el delicado equilibrio entre el progreso económico, industrial y social y el manejo racional de los recursos naturales, con el objeto de asegurar el bienestar de las generaciones futuras.

Las políticas de apertura económica fomentan una mayor eficiencia en la colocación de recursos, al permitir que los productos, servicios y la inversión fluyan libremente a través de las fronteras y respondan a los incentivos del mercado, aportando mayores flujos de tecnología e impulsando las inversiones para el desarrollo de métodos competitivos de producción. Sin lugar a dudas, todo ello debe encontrarse acompañado de medidas complementarias que contribuyan al desarrollo sostenido mediante normas ambientales en áreas interrelacionadas que ajusten los incentivos económicos para alcanzar objetivos de mejoramiento ambiental. Por ello, el modelo de normalización ecológica debe incorporar los estímulos materiales y los mecanismos de mercado necesarios para que las actividades productivas contemplen la protección ambiental.

En el proyecto de referencia han quedado perfectamente plasmados los instrumentos de gestión ambiental a efectos del cumplimiento de la normativa vigente, las normas de protección y conservación y la delimitación de responsabilidades por el daño para aquel que lo causare así como las infracciones y sanciones por los actos punibles debido al incumplimiento de la presente ley proyectada.

También prevé la educación y divulgación de la temática ambiental con destino a un Programa Nacional de Educación Ambiental y a una mayor investigación científica y desarrollo tecnológico.

En tanto y en cuanto se logre crear conciencia sobre la importancia sustancial del tema y se cree la infraestructura necesaria de difusión y control de las actividades que comprometan los componentes naturales de la Tierra, seguramente se habrá dado un paso importantísimo en beneficio de la comunidad toda. El proyecto adjunto así lo pretende.

En mérito a los fundamentos que anteceden se considera que vuestra honorabilidad habrá de dar curso favorable al presente proyecto.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

CARLOS S. MENEM.

Domingo F. Cavallo. — Rodolfo C. Barra.

Sr. Cafiero. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Britos). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Cafiero. — Señor presidente: a último momento recibimos por parte de algunos señores senadores reflexiones adicionales respecto de este dictamen.

En consecuencia, solicito que se postergue por una semana su tratamiento.

Sr. Presidente (Britos). — En consideración la moción de postergación formulada por el señor senador por Buenos Aires.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Britos). — Queda postergada por una semana la consideración del orden del día número 912.

115

LINEAS DE CREDITO

Sr. Presidente (Britos). — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Economía, de Economías Regionales y de Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el proyecto de comunicación del señor senador Costanzo por el que se solicitan informes sobre el grado de utilización a nivel jurisdiccional provincial de las distintas líneas de crédito vigentes. (Orden del Día N° 913.)

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Piuze). — (Lee)

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Economía, de Economías Regionales y de Micro, Pequeña y Mediana Empresa han considerado el proyecto de comunicación S-140/94 del señor senador Costanzo solicitando informes sobre el grado de utilización a nivel jurisdiccional provincial de las distintas líneas de crédito vigentes y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará el miembro informante os aconsejan su aprobación.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 119 del reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 25 de agosto de 1994.

*Fernando de la Rúa. — Remo J. Costanzo.
— Daniel E. Martínez. — Faustino M. Mazzucco. — José O. Figueroa. — Ricardo E. Laffertiere. — Juan R. Aguirre Lanari. — Luis Rubeo. — Fernando V. Cabana. — Conrado H. Storani.*

Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Banco de la Nación Argentina, informe sobre:

a) El grado de utilización, a nivel de jurisdicción provincial, de las distintas líneas de crédito vigentes.

b) Si en caso de que las líneas de crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas de las economías regionales extrapampeanas estuvieran agotadas o próximo a estarlo tiene previsto ampliarlas y con qué amplitud y características.

c) Qué mecanismos institucionales y recursos humanos específicos dispone para el trámite y evaluación de

los proyectos de inversión y reconversión de empresas en las distintas economías regionales.

d) Cómo evalúa el riesgo y las garantías de los proyectos señalados en el punto anterior, especialmente cuando son créditos supervisados, con estudios de mercado y con posibilidades ciertas de exportación.

e) Si tiene previsto, dentro del plan de informatización del banco, que los clientes —en particular los de menor escala— puedan utilizar dicha red para contar con información económica vinculada con sus producciones y mercados.

Remo J. Costanzo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El Banco de la Nación Argentina viene desarrollando una amplia y valiosa labor a lo largo y ancho de nuestra patria en sus más de quinientas veinte sucursales.

Esta institución financiera ha venido, luego de las hiperinflaciones sufridas, ampliando sus carteras de créditos tanto en su cuantía como en diversos tipos de líneas de financiamiento.

Asimismo este banco ha emprendido un importante programa de modernización en su gestión interna, incorporando progresivamente medios tecnológicos de última generación.

En esta línea es que realizamos una serie de preguntas a esta institución líder en el financiamiento de las distintas economías regionales, que pretenden despejar interrogantes sobre la cuantía del crédito vigente y conocer cuestiones referentes, por ejemplo, a los mecanismos institucionales y recursos humanos específicos de que dispone para el trámite y evaluación de los proyectos de inversión y reconversión de empresas, las normas de evaluación del riesgo y las garantías de estos proyectos, y otras cuestiones que pueden ser de interés (verbigracia, los alcances para los clientes del plan de informatización del banco).

Sin duda de que una institución financiera, de la magnitud del Banco de la Nación Argentina, pueda acompañar de manera satisfactoria el proceso de saneamiento de la crisis, reconversión y crecimiento de las economías regionales dependerá de la viabilidad de las mismas. Las preguntas que aquí hacemos van en esa dirección y con el espíritu de apoyar, desde el Parlamento, dicho camino.

Remo J. Costanzo.

Sr. Presidente (Britos). — En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

—En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Britos). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.

116

CONCESION DE ESPACIOS VERDES EN EZEIZA

Sr. Presidente (Britos). — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Asuntos